



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)**

Demandante: WILLIAM DE JESÚS ECHAVARRÍA MOLINA  
Demandados: ACP COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.  
Radicado: 05001 31 05 010 2019 00208 01  
Sentencia: S-181

### **AUTO**

En atención a la escritura pública 3374 del 2 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERIA S.A.S., se le reconoce personería como apoderada judicial a la Dra. MARICEL LONDOÑO RICARDO, T.P. 191.351 del C. S. de la Judicatura.

Se accede además a la sustitución de poder presentada por la referida apoderada, a favor de la Dra. AURA DIMELSA OSPINA VIDAL, portadora de la T.P. N° 312.786 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que la apoderada principal, con efectos desde el momento mismo de la presentación del memorial.

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas

COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de ésta última en los aspectos no recurridos, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el 18 de noviembre de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES:**

WILLIAM DE JESÚS ECHAVARRÍA MOLINA demandó a PROTECCIÓN S.A. y a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad de la afiliación efectuada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por cuanto no se le proporcionó una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además se condene a las costas y agencias en derecho a las dos demandadas.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 12 de julio de 1958, se afilió al Instituto de Seguros Sociales –ISS- para los riesgos de IVM a partir del mes de diciembre de 1978, el 17 de julio de 1996 suscribió formulario de afiliación y vinculación a PROTECCIÓN S.A. con la convicción de que accedería al derecho pensional en los términos ofrecidos por el fondo privado, en el que uno de sus ejecutivos le manifestó que podía pensionarse de manera anticipada. Manifiesta que la asesoría brindada por parte del fondo fue deficitaria, ya que no se le informó sobre la posibilidad de retracto, no se hizo mención sobre los temas técnicos relacionados con la construcción de la pensión, como que la mesada pensional dependía del capital de la

cuenta de ahorro individual compuesta por aportes, rendimientos generados y bono pensional.

Agrega que solicitó a PROTECCIÓN S.A. la proyección de su mesada pensional, no obstante, el resultado obtenido no guarda ninguna armonía con las promesas que se le suministraron al momento de afiliarse al fondo privado, pues la pensión es muy inferior a la que debería recibir si estuviera afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida –RPMPD- administrado por el ISS hoy Colpensiones.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

Al contestar, **COLPENSIONES** dice que es cierta la solicitud realizada por el demandante ante PROTECCIÓN S.A., así como la elaboración de la proyección pensional, sin embargo, desconoce la información completa de contenida en ellas. Sobre los demás hechos, incluyendo la fecha de afiliación al ISS dice que no le constan, los cuales deberán ser probados en el proceso. Se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentación fáctica y legal. Como excepciones de fondo propuso inexistencia de la nulidad de traslado de régimen pensional, inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al RPM por falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, la genérica.

A su turno, **PROTECCIÓN S.A.** dice que es cierta la fecha de nacimiento del demandante, la de afiliación a esa entidad el 17 de julio de 1996, momento en el que la accionante recibió asesoría adecuada, suficiente y oportuna de parte de los ejecutivos de esa sociedad y la proyección realizada por el fondo al señor ECHAVARRÍA MOLINA; respecto al momento de afiliación del accionante al ISS manifiesta que no le consta por tratarse de un hecho ajeno a esa sociedad. Sobre los demás hechos manifiesta que no son ciertos

porque la asesoría brindada al actor se dio bajo todos los parámetros legales y técnicos, bajo una orientación objetiva, señalando las diferencias que existen entre uno y otro régimen, los requisitos para acceder a la pensión y las modalidades de la misma. Se opuso a las pretensiones de la demanda indicando que el acto de afiliación del demandante se realizó de manera libre y voluntaria, constituyéndose en un verdadero contrato entre el demandante y PROTECCIÓN S.A.

Como excepciones de fondo propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, innominada o genérica, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 18 de noviembre de 2020 el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la INEFICACIA del acto por el cual se produjo el traslado del señor ECHAVARRÍA MOLINA del ISS hoy COLPENSIONES a la AFP PROTECCIÓN S.A. En tal sentido, se entiende que el demandante ha permanecido afiliado al Régimen de Prima Media hoy administrado por COLPENSIONES, de manera permanente y sin solución de continuidad. ORDENÓ a la AFP PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES, todos los aportes que ha realizado el señor ECHAVARRÍA MOLINA al riesgo de pensiones, existentes en su cuenta individual de ahorro pensional, junto con los rendimientos que se hubieren generado y las comisiones cobradas.

ORDENÓ a COLPENSIONES, reactivar la afiliación del señor ECHAVARRÍA MOLINA, sin solución de continuidad, y una vez recibidos los recursos provenientes de la AFP PROTECCIÓN S.A., deberá validar su equivalencia en semanas de cotización, para efectos

de atender el reconocimiento de las prestaciones económicas a que tenga derecho, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales para ello. CONDENÓ en costas a la AFP PROTECCIÓN S.A.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

Inconforme con lo decidido, la apoderada de la codemandada PROTECCIÓN S.A. presenta recurso parcial de apelación sobre la orden del numeral segundo relacionada con trasladar a COLPENSIONES lo correspondiente a la comisión de administración, insistiendo que no es procedente que se ordene dicha devolución ya que se trata de comisiones ya causadas dentro de la administración de los dineros de la cuenta de ahorro individual del demandante, descuentos realizados conforme a la ley como contraprestación a una buena gestión de administración.

Si se ordena devolver además de los dineros de la cuenta de ahorro individual del demandante, los rendimientos financieros generados y adicionalmente lo descontado por comisión de administración, se estaría constituyendo en un enriquecimiento sin causa a favor de COLPENSIONES por recibir una comisión que ni siquiera está destinada a financiar la pensión de vejez del demandante; adicionalmente se le están trasladando los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, si la consecuencia de la ineficacia es que las cosas vuelvan a su estado anterior, significa que el contrato de afiliación nunca existió, que PROTECCIÓN nunca debió administrar los recursos de la cuenta de ahorro individual del demandante, tampoco dichos rendimientos se produjeron y por ende no se cobró una comisión de administración, por lo que COLPENSIONES no está legitimada a recibir tales comisiones por una cuenta que nunca administró, si se hace la ficción no se puede entender que hubo rendimientos, y por ello tiene derecho la AFP a conservar la comisión de administración (artículo 20 de la ley 100 del 1993). Manifiesta además que frente a eso se destina un pago para la aseguradora del

seguro previsional, ya se ha pagado la prima a la aseguradora, por ello la AFP está imposibilitada para hacer esa devolución. Por último, indica que, frente al cobro del 3% del cobro de administración y el seguro previsional opera la prescripción toda vez que son conceptos que se descuentan en la periodicidad.

Por su parte COLPENSIONES solicita se revoque la sentencia de primera instancia, toda vez que, no le asiste derecho al demandante a solicitar el cambio de régimen pues se encuentra inmerso en la restricción de edad en el literal e del artículo 2 de la ley 797 de 2003. Además, el interés propio de este proceso no es otro que la diferencia en cifras conforme se indica en la declaración rendida por el demandante, hecho que no constituye un vicio o causa tal para declarar la ineficacia del contrato suscrito entre las partes que dio lugar al traslado de régimen. La responsabilidad de las AFP por la ineficacia de un traslado no solo se debe enmarcar a reparar el daño individualmente sometido a consideración de un juez, sino que debe tener alcance frente a los daños indirectos que comprometen los derechos de terceros, se debe tener en cuenta el principio de sostenibilidad financiera que representa la garantía del derecho fundamental a la pensión de los colombianos de manera sostenida e indefinida.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, **COLPENSIONES** presentó sus alegatos de conclusión argumentando que el demandante contó con la debida asesoría, la cual cumplía con las formalidades establecidas para la época y es por ello que el objeto del contrato no puede ser acusado de ilícito, tampoco puede predicarse que sufrió daño alguno por cuanto al momento de su vinculación no tenía un derecho pensional consolidado en el RPMPD.

Por lo anterior solicita sea revocado el fallo de primera instancia en donde se declaró la ineficacia de traslado, ya que éstas actuaciones están llamadas a insolventar el Sistema General de Pensiones pues los dineros devueltos no son suficientes para el financiamiento de la prestación económica que se busca que Colpensiones reconozca, circunstancia que atenta contra el principio de sostenibilidad financiera.

De otro lado refiere Colpensiones que, si se considera que hay lugar a confirmar la decisión respecto a la declaratoria de ineficacia, se tenga en cuenta que lo trasladado no sea inferior al monto total en caso de que el actor hubiese permanecido en el RPMPD; asimismo pide que la devolución de los aportes a esa AFP se realice de manera indexada; y la confirmación de la absolución de las costas procesales.

### **CONSIDERACIONES:**

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por los recurrentes, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de COLPENSIONES - en los temas restantes - con el objeto de salvaguardar sus intereses, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia de primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación del señor WILLIAM DE JESÚS ECHAVARRÍA MOLINA realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que la AFP PROTECCIÓN S.A. queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se tiene que: *i)* WILLIAM DE JESÚS ECHAVARRÍA MOLINA nació el 12 de julio de 1958; *ii)* se afilió al ISS el 05 de diciembre de 1978; y *iii)* el 17 de julio de 1996 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PROTECCIÓN S.A., entidad en la que se encuentra afiliado actualmente.

Lo que pretende el demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS, administrado en este caso por la AFP PROTECCIÓN S.A., y que, en consecuencia, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto importa reiterar, tal y como se ha dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación. Adicionalmente, se ha establecido que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que el afiliado no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba que acredite que esa obligación sí se cumplió.

Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años, como ha ocurrido por ejemplo en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL 1421 de 2019, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 2611 de 2020, SL 1741 de 2020, SL 1741 de 2021, SL 3537 de 2021 o más recientemente la SL 1055 del 2 de marzo de 2022 y la SL 2058 del 4 de mayo de 2022, entre muchas otras. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. Nº 31.989 de 2008:



*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”*

Del desarrollo jurisprudencial citado se pueden evidenciar una serie de ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) no es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo

privado incumplió su deber de información al afiliado, al no suministrarle, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación, no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Sin que tampoco sea de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993 –según fue mencionado por Colpensiones–, tema frente al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito *“... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la*

*nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.*

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció el demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso del demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que la demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima

como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

De otro lado, en cuanto a decisión del a quo de ordenar la devolución de todos los aportes que ha realizado el señor ECHAVARRÍA MOLINA al riesgo de pensiones, existentes en su cuenta individual de ahorro pensional, junto con los rendimientos que se hubieren generado y las comisiones cobradas tema cuestionado en el recurso de apelación por PROTECCIÓN S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*"Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

*(...)”.*

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

En consecuencia, la decisión de primer grado deberá ser ACLARADA en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. que proceda igualmente con el traslado de las cuotas de administración, de los porcentajes de seguros y reaseguros previsionales y los aportes para garantía de pensión mínima, recibidos durante el tiempo que el señor WILLIAM DE JESÚS ECHAVARRÍA MOLINA estuvo vinculado a esa entidad. Esto por cuanto se estima que, en la parte resolutive del fallo de primer grado, el funcionario judicial no fue preciso y concreto en este aspecto de la decisión.

Todo lo anterior sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

*"En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021)."*

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima -tema recurrido por la PROTECCIÓN S.A., toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de dicha AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Ahora bien, no es procedente la indexación según se solicita en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia por COLPENSIONES, pues se trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o cuando menos en el recurso de apelación, de manera que una decisión en tal sentido implicaría

decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.000.000 a favor del demandante.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el día 18 de noviembre de 2020, pero la **ACLARA** en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. que proceda igualmente a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, el valor recibido por concepto de cuotas de administración, los porcentajes de seguros y reaseguros, y los aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima durante el tiempo que el demandante estuvo afiliado a esa entidad.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.000.000 a favor del demandante.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Francisco Arango Torres**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **18e2a8b0ec3be28c2a1826bdf7d1088c2c5d40eddab37d9051ed5885aec6894e**

Documento generado en 14/07/2022 11:34:16 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**